

# El ventilador de Uscátegui

**Las acusaciones del general Uscátegui demuestran la responsabilidad del Estado y del Ejército en la masacre de Mapiripán. Además, de la estrecha vinculación de los paramilitares y de la Séptima Brigada en el departamento del Meta**

— \*HERNANDO LÓPEZ —

Cuando ocurrió la masacre de Mapiripán, el 12 de julio de 1997, no sólo los altos mandos militares la negaron, también lo hizo el gobierno de Ernesto Samper Pizano. El ministro de Defensa de la época, Gilberto Echeverry Mejía, con mucho desparpajo y actitud desafiante, alegó que la masacre era inexistente, pues "ni los cadáveres, ni los deudos aparecen". A pesar de la aparición de varios cadáveres en el río y de las denuncias del juez Leonardo Cortés y de campesinos de la región, el ministro Echeverry Mejía insistió en la negativa de conformidad con el informe de los altos mandos militares.

Igualmente, los gobiernos nacional y departamental, así como la Séptima Brigada con sede en Villavicencio, en actitud indolente, desestimaron las denuncias del juez de Mapiripán, Leonardo Cortés, ahora refugiado en el exterior, quien advirtió de la presencia amenazante de los paramilitares, que preparaban la masacre. En efecto, Cortés visitó al coronel Hernán Orozco, a la sazón comandante encargado del Batallón Joaquín París, a quien puso al corriente de la situación. El oficial le trasladó la inquietud al general Uscátegui a Villavicencio y en varias ocasiones le insistió en el tema, pero nunca obtuvo respuesta. Orozco está también refugiado en el exterior bajo protección de varias organizaciones no gubernamentales.

## Declaraciones contundentes

Por estas razones, no sorprenden las declaraciones del general Jaime Alberto Uscátegui, detenido en la Escuela de Caballería, de donde saldrá a responder en audiencia pública, el próximo 20 de abril, por su participación en la masacre de

No salen bien librada la cúpula militar de las denuncias del general Uscátegui con tufillo a chantaje.

Mapiripán, quien en la revista Cambio No 561 del 29 de marzo al 5 de abril de 2004, lanza duras acusaciones contra los militares y revela la conversación que tuvo hace algunos meses con el general Jorge Enrique Mora, anterior comandante de las Fuerzas Militares, a quien le dijo, según su declaración a la revista: "Vea, mi general, yo ya estoy mamado de esto. Ustedes saben que soy inocente y han dejado ir esto muy lejos. Entonces hagámonos pasito...". Uscátegui dice que no se dejará condenar a 40 años y que si sus superiores no le ayudan contará la connivencia y la complicidad de los paramilitares con el Ejército, en particular con la Séptima Brigada en el Meta. Según el ex

oficial, del computador de esta Brigada salían las amenazas contra varias personalidades, entre ellas el ex fiscal Gómez Méndez. También en uno de sus computadores, cuya información está en poder de los Estados Unidos(?) y de la Fiscalía, estaba la nómina de los paramilitares en departamento del Meta. La amenaza del general Uscátegui es contundente: no dejará fítere sin cabeza.

Al contrario de la ceguera del gobierno de Samper Pizano y del ministro Echeverry Mejía, que en la época eran rehenes de los altos mandos militares por la crisis política del proceso 8.000, al poco tiempo hubo la certeza de la masacre de Mapiripán. Las investigaciones posteriores demostraron que los

casa. Luego se fueron por el río, de la misma manera, sin ser detectados por los retenes del Ejército y de la Armada. Nadie vio nada. Los numerosos hombres armados nunca fueron vistos por los militares que copan la región. Pasaron todos los controles como si fueran fantasmas.

## Degradación militar

En este contexto, el enjuiciamiento es contundente. Nadie duda hoy de la masacre. Tampoco de la responsabilidad del Estado y de la degradación que significan los métodos de los militares en la lucha contrainsurgente. Es el problema de fondo que eluden los medios y las revistas que ahora quieren hacer condenar a toda costa al general Uscátegui. ¡Y asunto arreglado! Naturalmente, son importantes las responsabilidades individuales. Los militares que participaron en la masacre —y que tengan responsabilidad por acción u omisión— deben ser sancionados de manera ejemplar.

Pero más allá de la responsabilidad individual —que es importante— están las lecciones sobre el manejo militar del orden público. También del alcance de la guerra sucia y del papel del paramilitarismo, que no ha sido una rueda suelta en este proceso. La responsabilidad del Estado y de sus agentes es evidente, como también del gobierno de Ernesto Samper, quien desoyó la alerta temprana del juez y los campesinos de la región. Tiene razón Uscátegui, todos deben responder, aunque está claro que lo que pretende el ex oficial, cuando dice "hagámonos pasito", es que todos se arropen con la misma cobija para que haya la total impunidad, como es la costumbre en este tipo de masacres oficiales. Y es lo que no deben permitir los colombianos. Las organizaciones sindicales, sociales y populares, las ONG y otras entidades de control, deben estar atentas al proceso, para que no termine en la absolución y "cosa juzgada", como ocurrió con el proceso de los generales Yanine Díaz, Velandia Hurtado, Rito Alejo del Río y otros, en una lista interminable de monumento a la impunidad. \*voz

general Jaime Alberto Uscátegui.

paramilitares llegaron desde Urabá, vía aérea, a San José del Guaviare, como Pedro por su